



Consejo Superior de la Judicatura

Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

IMPUGNACIÓN TUTELA

RADICACIÓN No.: 08-001-40-53-003-2021-00680-01

ACCIONANTE: RAFAEL ANDRES GUARDIOLA OROZCO CC 1.143.126.415.

ACCIONADO: SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PUERTO COLOMBIA - ATLÁNTICO.

DERECHOS: DEBIDO PROCESO

Barranquilla, trece (13) de mayo de dos mil veintidós (2022).

I. ASUNTO A TRATAR

Procede el despacho a decidir acerca de la impugnación a que fue sometido el fallo de tutela de fecha 30 de septiembre de 2021, proferido por el JUZGADO PROMISCO MU NICIPAL DE PUERTO COLOMBIA, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor RAFAEL ANDRES GUARDIOLA OROZCO, quien actúa a través de apoderado judicial, contra SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PUERTO COLOMBIA - ATLÁNTICO, por la presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso, presunción de inocencia, legalidad y defensa; y en el cual se declaró improcedente el amparo solicitado.

II. ANTECEDENTES

En el escrito de la tutela, el accionante, narra los siguientes hechos que se sintetizan así:

1. Manifiesta que, narra el accionante que le fue impuesto comparendo por exceso de velocidad dentro de la Carrera 30 No. 3B de Puerto Colombia cuando circulaba en el vehículo tipo motocicleta distinguido con placas VVI08E en fecha 24 de abril de 2020, 21 de junio de 2020 y 3 de agosto de 2020.
2. Dichas ordenes fueron cargadas a nombre del señor RAFAEL GUARDIOLA OROZCO por ser el propietario de la motocicleta.
3. Agrega que, de conformidad con la norma sustancial, las supuestas infracciones del 24 de abril de 2020 y del 21 de junio de 2020 no fueron validadas en el término legal establecido. Por lo tanto, su imposición por parte de la SECRETARÍA DE TRÁNSITO DE PUERTO COLOMBIA no es legal.
4. De igual manera informa dentro de las notificaciones surtidas por la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PUERTO COLOMBIA, las rúbricas de recibido constatadas dentro de las guías de envío no devienen del señor GUARDIOLA OROZCO ni de ninguno de sus familiares.
5. Concluye que a la fecha ha operado la caducidad, por lo que no le es dable a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA - SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PUERTO COLOMBIA iniciar el trámite contravencional, por lo que acude al amparo invocado a fin de que se reguarde le derecho al debido proceso.

III. TRÁMITE PROCESAL

La presente acción de tutela fue admitida el 16 de septiembre de 2022, por el JUZGADO PROMISCO MU NICIPAL DE PUERTO COLOMBIA, ordenándose la notificación de la accionada, para que se pronunciaran sobre los hechos relatados en el escrito de tutela.

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PUERTO COLOMBIA – ATLÁNTICO, actuando a través de JUAN MANUEL MEZA BARRAZA en su condición de Secretario de Transporte y Tránsito de Puerto Colombia, rindió informe manifestando que esgrimió dentro de los descargos solicitados dentro del auto de apremio, solicitó la improcedencia de la presente acción de tutela, por no haberse emitido conducta vulneradora de los derechos fundamentales, por el contrario las actuaciones emitidas se ajustaron a los rigores de la norma de tránsito, otorgándose las garantías constitucionales a lugar.

Posterior a ello, el 30 de septiembre de 2021, se profirió fallo de tutela, declarando la improcedencia de los derechos depuestos, por lo que fue impugnada y por reparto correspondió su conocimiento a esta agencia judicial.

IV. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo proferido el 30 de septiembre de 2021, por el JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA, decidió declarar la improcedencia de los derechos depuestos por la parte accionante, en ocasión a que: *“...Confrontado lo anterior con el caso de marras se tiene que el comparendo de referencia 08573000000028538107 tuvo fecha de creación el 24 de abril de 2020 cuya resolución fue emitida el 30 de noviembre de 2020, con respecto al comparendo 08573000000028540055 se tiene que su proferimiento fue el 21 de junio de 2021 y cuya resolución fue emitida el 30 de noviembre de 2020, finalmente frente al comparendo 08573000000028541598 se tiene que su génesis data de 3 de agosto de 2020 y cuya sentencia que declara contraventor fue emitida el 30 de noviembre de 2020. En tal sentido es abisal que dentro de los cómputos objetivos los términos para adelantar y gestionar los tramites sancionatorios y emitir resolución condenatoria se ajustan a los tiempos que demanda la norma sustancial del caso, por lo que no es plausible esgrimir la existencia de emitir la caducidad oficiosa, por lo que la actuación de la entidad cognoscente se ajustó a las directrices procesales de rigor...”*

VI. IMPUGNACIÓN

La parte accionante manifestó su inconformidad en los siguientes términos: *“...Solicito que revoque el numeral primero de la parte resolutive de la sentencia del 30 de septiembre de 2021 y en su lugar ampare “el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO del señor RAFAEL GUARDIOLA OROZCO”. Que además declare que “que la notificación de las ordenes de comparendo No. 08573000000028538107 del 24 de abril de 2020, No. 08573000000028540055 del 21 de junio de 2020 y No. 08573000000028541598 del 03 de agosto de 2020 de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA – SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PUERTO COLOMBIA, no se hicieron conforme a los requisitos establecidos en la ley 1437 de 2011”. Y en consecuencia ordene “la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA – SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PUERTO COLOMBIA que revoque las multas de tránsito producto de las siguientes ordenes de comparendo: 08573000000028538107 del 24 de abril de 2020, 08573000000028540055 del 21 de junio de 2020 y 08573000000028541598 del 03 de agosto de 2020, por haber operado el fenómeno de la caducidad”. ...”*

VII. PROBLEMA JURÍDICO

De acuerdo con los antecedentes resumidos anteriormente, corresponde a esta agencia judicial determinar:

¿La entidad accionada, ¿SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PUERTO COLOMBIA – ¿ATLÁNTICO, ha vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, legalidad y defensa, del señor RAFAEL ANDRÉS GUARDIOLA OROZCO, dentro del proceso sancionatorio adelantado con ocasión de los comparendos impuestos a su cargo, solicitando la caducidad de los mismos?

¿Se encuentran reunidos los presupuestos jurídicos- facticos para revocar la sentencia proferida por el a-quo?

VIII. COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, por ser superior funcional del a-quo, este juzgado resulta competente para conocer de la impugnación al fallo de tutela en referencia.

IX. NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

El marco constitucional está conformado por los artículos 23, 29 Y86 de la Constitución Política, Decreto 2591 de 1991, Ley 1755 de 2015, Ley 1437 de 2011, sentencias T-753 de 2006, T-406 de 2005, T- 161 de 2017, T-051/2016, C-980/2010, C-418 de 2017, T-903 de 2014, T-487 de 2017.

X. CONSIDERACIONES

La acción de tutela es un mecanismo concebido por la Constitución de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de todas las personas, cuando estos resultaren amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, con las características previstas en el inciso final del artículo 86 de la Constitución Política la cual constituye una garantía y un mecanismo constitucional de protección, directa, inmediata y efectiva, de los derechos fundamentales.

Para la procedencia de este mecanismo tutelar, es necesario que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer sus derechos, salvo que se ejerza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La acción de tutela procede a título subsidiario cuando la protección judicial del derecho fundamental no puede plantearse, de manera idónea y eficaz, a través, de un medio judicial ordinario y, en este sentido los medios judiciales ordinarios tienen preferencia sobre la acción de tutela. No obstante, la acción de tutela procede como mecanismo transitorio, así exista un medio judicial ordinario, cuando ello sea necesario para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios, será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia atendiendo las circunstancias en que se encuentra la solicitante.

EL PRESUPUESTO DE SUBSIDIARIEDAD.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, en armonía con lo dispuesto por los artículos 86 de la Carta Política y 6º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un mecanismo judicial, para la protección inmediata de los derechos fundamentales, de carácter subsidiario. Ésta procede siempre que en el ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para la tutela judicial de estos derechos.

En reiterados pronunciamientos de la Corte, se ha manifestado que no siempre el juez de tutela es el primer llamado a proteger los derechos constitucionales, toda vez que su competencia es subsidiaria y residual, es decir procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial de comprobada eficacia, para que cese inmediatamente la vulneración. Sobre el particular, en la sentencia T-753 de 2006 la Corte precisó:

“Frente a la necesidad de preservar el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, se ha sostenido que aquella es improcedente si quien ha tenido a su disposición las vías judiciales ordinarias de defensa, no las utiliza ni oportuna ni adecuadamente, acudiendo en su lugar a la acción constitucional. Ello por cuanto que, a la luz de la jurisprudencia pertinente, los recursos judiciales ordinarios son verdaderas herramientas de protección de los derechos fundamentales, por lo que deben usarse oportunamente para garantizar su vigencia, so pena de convertir en improcedente el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86 superior.”

Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en un escenario de debate y decisión de litigios, y no de protección de los derechos fundamentales. Al respecto, en la sentencia T-406 de 2005, la Corte indicó:

“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de defensa judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario la acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa de los derechos fundamentales y se convertiría en un recurso expedito para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales. De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de la tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de los derechos fundamentales, sino que se convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales. Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la función del juez de amparo.”

Puntualizando, se puede indicar que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo de los medios judiciales ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, en los casos en que existan medios judiciales de protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela será procedente si el juez constitucional logra determinar que: Los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable frente a sus derechos fundamentales; y, el titular de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de especial protección constitucional.

LA SUBSIDIARIEDAD EN ACTOS ADMINISTRATIVOS

Ahora bien, en materia de actos administrativos de contenido particular y concreto, como es el caso de las sanciones por la comisión de infracciones de tránsito, donde por la naturaleza jurídica de la resolución sancionatoria se crea una situación jurídica, por ende, cuando el perjudicado no esté conforme el mecanismo judicial procedente será el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual permite resarcir el daño causado injustificadamente a un derecho subjetivo.

Debe tenerse en cuenta que, uno de los requisitos para acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es haber interpuesto los recursos en sede administrativa, sin

embargo, cuando no se hubiesen presentado porque las autoridades no lo permitieron, no es posible exigir ese requisito. La falta de notificación de los actos administrativos, implica que los afectados no tengan conocimiento de los pronunciamientos de la administración y, por ende, constituye una barrera para el ejercicio los recursos procedentes, en consecuencia, cuando el alta de interposición de recursos obedezca a la falta de notificación, es posible acceder al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, aun cuando no se hubiere agotado ese requisito de procedencia.

Por otro lado, también resultaría posible solicitar la revocatoria directa del acto administrativo por medio del cual se impone la sanción, regulada en el Artículo 93 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

No obstante, la aceptación de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra los actos administrativos depende de si el contenido de los mismos implica una vulneración evidente de los derechos fundamentales o la amenaza de la ocurrencia de un perjuicio irremediable de tal magnitud que obligue la protección urgente de los mismos.

En este sentido, la Corte ha precisado en sentencia T- 161 de 2017 que: (i) *La improcedencia de la tutela como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, se justifica en la existencia de otros mecanismos, tanto administrativos, como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Adicionalmente, se ha señalado que cada acción constitucional conlleva la necesidad de confrontar las condiciones del caso, de manera que se defina el cumplimiento de los requisitos establecidos en la jurisprudencia para el acaecimiento del perjuicio irremediable.*

A su vez, la Corte Constitucional ha precisado que en los eventos en que se evidencie que (i) la actuación administrativa ha desconocido los derechos fundamentales, en especial los postulados que integran el derecho al debido proceso; y (ii) los mecanismos judiciales ordinarios, llamados a corregir tales yerros, no resultan idóneos en el caso concreto o se está ante la estructuración de la inminencia de un perjuicio irremediable; la acción de tutela es procedente de manera definitiva en el primer caso, o como mecanismo transitorio en el segundo, en aras de contrarrestar los efectos inconstitucionales del acto administrativo.

De esta manera, la Corte ha señalado igualmente que para la comprobación de la inminencia de un perjuicio irremediable que justifique la procedencia de la acción de tutela, se deben observar criterios como (i) la edad de la persona, por ser sujeto de especial protección en el caso de las personas de la tercera edad; (ii) el estado de salud del solicitante y su familia; y (iii) las condiciones económicas del peticionario del amparo. En estos eventos, debe mencionarse que la Corte ha exigido que se haya desplegado cierta actividad procesal administrativa mínima por parte del interesado.

Finalmente, en cuanto a la procedencia de la acción de tutela de forma definitiva en relación con actos administrativos, la Corte ha señalado que deben atenderse las circunstancias especiales de cada caso concreto. En estos eventos específicos, ha indicado que, pese a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial como el medio de control de la nulidad y restablecimiento del

derecho, se deben analizar las condiciones de eficacia material y las circunstancias especiales de quien invoca el amparo, que pueden hacer viable la protección de los derechos del afectado a través de la acción de tutela de forma definitiva.

MARCO LEGAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE DEBE ADELANTARSE ANTE LA COMISIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO CAPTADAS A TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLÓGICOS.

La Corte Constitucional en Sentencia T-051/2016 hizo las siguientes precisiones, respecto del procedimiento de foto multas:

1. A través de medios técnicos y tecnológicos es admisible registrar una infracción de tránsito, individualizando el vehículo, la fecha, el lugar y la hora, lo cual, constituye prueba suficiente para imponer un comparendo, así como la respectiva multa, de ser ello procedente (Art. 129).
2. Dentro de los tres días hábiles siguientes se debe notificar al último propietario registrado del vehículo o, de ser posible, al conductor que incurrió en la infracción (Art. 135, inc. 5º).
3. La notificación debe realizarse por correo certificado, de no ser posible se deben agotar todos los medios de notificación regulados en la legislación vigente (Art. 135, inc. 5 y Sent. C-980/2010).
4. A la notificación se debe adjuntar el comparendo y los soportes del mismo (Art. 135, inc. 5º y L. 1437/2011, art. 72).
5. Una vez recibida la notificación hay tres opciones:
 - a. Realizar el pago (Art. 136, nums. 1º, 2º y 3º).
 - b. Comparecer dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación de la infracción y manifestar inconformidad frente a la misma, evento en el cual debe realizar audiencia pública (art. 136, inc. 2º y 4º y Art. 137).
 - c. No comparecer dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación de la infracción. En este evento, si la persona no comparece dentro de los 30 días hábiles siguientes a la infracción debe proceder a realizar audiencia (Art. 136, inc. 3º y Art. 137).
6. En la audiencia puede comparecer por sí mismo el presunto infractor o por medio de apoderado, quien debe ser abogado en ejercicio (Art. 138).
7. En audiencia realizarán descargos y decretarán las pruebas solicitadas y las que requieran de oficio, de ser posible practicarán y sancionará o absolverá al presunto contraventor (Art. 136, inc. 4º).
8. Contra los autos proferidos en audiencia procede el recurso de reposición, el cual podrá ser presentado y sustentado en la misma audiencia y el recurso de apelación, el cual únicamente procede contra la resolución, con la que ponga fin a la primera instancia (art. 142).

La naturaleza jurídica de la resolución mencionada corresponde a la de un acto administrativo particular, por medio del cual crea una situación jurídica. Por ende, cuando el perjudicado no

esté conforme con la sanción impuesta, el mecanismo judicial procedente será el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual permite resarcir el daño causado injustificadamente a un derecho subjetivo.

CASO OBJETO DE ESTUDIO

Descendiendo al caso *sub examine*, se tiene que el señor RAFAEL ANDRÉS GUARDIOLA OROZCO, quien actúa a través de apoderado judicial, hace uso del presente trámite constitucional de la referencia, contra la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PUERTO COLOMBIA – ATLÁNTICO, por la presunta violación a sus derechos fundamentales de debido proceso, legalidad y defensa.

Lo anterior, en ocasión a que indica que en fecha 24 de abril de 2020, 21 de junio de 2020 y 3 de agosto de 2020, le fue impuesto comparendo por exceso de velocidad dentro de la Carrera 30 No. 3B de Puerto Colombia cuando circulaba en el vehículo tipo motocicleta distinguido con placas VVI08E, que, de conformidad con la norma sustancial, las supuestas infracciones del 24 de abril de 2020 y del 21 de junio de 2020 no fueron validadas en el término legal establecido. Por lo tanto, su imposición por parte de la SECRETARÍA DE TRÁNSITO DE PUERTO COLOMBIA no es legal, por lo que cuestiona el procedimiento adoptado por la entidad de tránsito y solicita la caducidad de estas.

En el caso de marras, el accionante RAFAEL ANDRÉS GUARDIOLA OROZCO, no ha demostrado el perjuicio irremediable que la entidad accionada podría estar causándole con ocasión de la ordenes comparendos a su cargo, por lo que puede invocar la protección de sus derechos, a través de otro medio en razón a que los hechos como se demuestra con las ordenes de los comparendos datan del 2020.

SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO, en su informe indica: “...las actuaciones emitidas se ajustaron a los rigores de la norma de tránsito, otorgándose las garantías constitucionales a lugar...”

De este modo, revisado el conjunto de los elementos de prueba que fueron aportados y recaudados en la presente causa, por las partes que conforman la presente Litis, resulta forzoso concluir que en este caso no se acreditan los supuestos jurisprudenciales que avalan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos, como es el caso, de la sanción impuesta al accionante, por declarársele contraventor de las leyes de tránsito.

Lo anterior, teniendo en cuenta que si se pretende discutir conflicto alguno sobre el trámite adelantado por el organismo de tránsito, o sobre la notificación de los mismos, el accionante cuenta con una vía ordinaria, adecuada, idónea y eficaz, para discurrir tales inconformidades; por consiguiente, el juez constitucional no es el primer llamado para dirimir este tipo de conflicto.

De igual manera, la Corte Constitucional también ha establecido como excepción al principio de subsidiariedad cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta diversos factores y cada caso en concreto según se manifestó en líneas anteriores, sin embargo, en el presente caso no se evidencia que se esté enfrente de este, pues el actor, no se encuentra en estado de vulnerabilidad, ni debilidad manifiesta, no acreditó ser un sujeto de especial protección constitucional, ni se encuentra demostrado que las vías ordinarias

establecidas no sean idóneas ni eficaces para este caso en concreto, ni se halla plenamente demostrado que el acto administrativo sea contrario a la legislación vigente, ni quebrantador de derechos fundamentales. En suma, la acción de tutela no es el escenario para cuestionar el proceso sancionatorio adelantado por las autoridades de tránsito por la comisión de una infracción.

XI. RESUMEN O CONCLUSIÓN

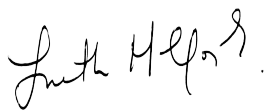
Habida cuenta de los hechos y argumentaciones esbozadas anteriormente, se procederá el juzgado a confirmar la sentencia proferida en primera instancia, en consideración a que en el presente caso no se superó el requisito de subsidiariedad que reviste este mecanismo de amparo.

Por lo expuesto, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR el fallo de tutela de fecha 30 de septiembre de 2022, proferido por el JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor RAFAEL ANDRES GUARDIOLA OROZCO CC 1.140.857.031, quien actúa a través de apoderado judicial, contra SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
2. NOTIFÍQUESE esta providencia por el medio más expedito, es decir, por medio del correo electrónico ccto03ba@cendoj.ramajudicial.gov.co.
3. Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



LINETH MARGARITA CORZO COBA
JUEZA